

Suprema Corte de Justicia <sup>124</sup>

de los

Estados Unidos Mexicanos

Año de 1874

Foca al Juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Sonora por varias comerciantes de Guaymas contra el C. Activo de Ventas de ese puerto.

Tribunal Pleno

Guaymas.

290-m



México Dic. 9 de 1874. Visto el  
recurso de amparo promovido an-  
te el Juegado de Distrito de Sonora  
por los S. J. V. Sandoval, Wenceslao  
Yberrí, W. Luiana





Re.  
Díctre 9. / 74

Acompañó a V. para en  
México Octubre revisión el juicio de amparo promovido  
21 de 1874 por varias personas de este puerto, contra  
Recibos y dese el acto del C. Admor. de Rentas del  
creación en la ~~en~~ mismos, que les exige el pago de la cuota  
audienencia ~~en~~ que se les asignó en virtud de la ley de la  
Legislatura de este Estado de 24 de Junio  
último. Asimismo acompaño copias cer-  
tificadas de la sentencia y del pedimento  
fiscal.

Independencia y Libertad. Guay-  
mas. Setiembre 10 de 1874.

M. Campillo

C. Pres. de la Suprema Corte  
de Justicia de la Nación.

México.

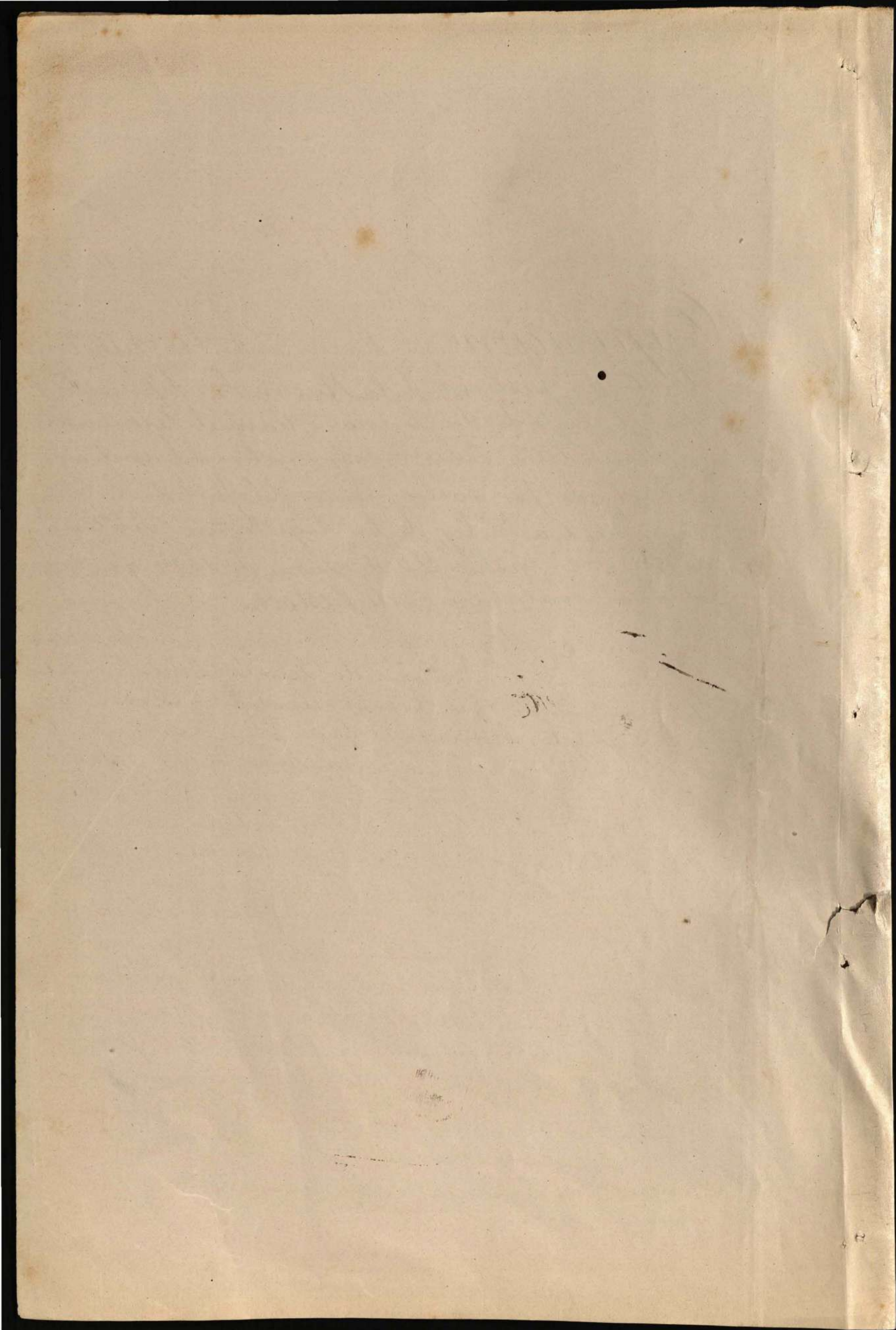






Exposición que hacen ante la Suprema  
Corte de justicia de la Nación los diputados  
por el Estado de Sonora. Manuel Escalante  
y Jesus M.<sup>a</sup> Ferreira, con motivo del amparo  
solicitado por varios vecinos del puerto de Guay-  
mas contra la ley de la Legislatura del Estado  
de Sonora fecha 22 de Junio de 1874 que impu-  
so una contribucion de \$15,000..







## C. C. Magistrados.

Manuel Escalante y J. M. Ferreira diputados al Congreso de la Union por el Estado de Sonora, en el recurso de amparo promovido por varios vecinos de Guaymas contra la ley expedida por la Legislatura del Estado en 22 de Junio del presente año, ante U. U. respetuosamente exponen: No ignoran los que suscriben

que conforme a la ley no son partes en el recurso que se ha suscitado, pero les consta igualmente que la Corte suprema de justicia acostumbra acoger con benevolencia todos los informes que se presentan en negocios en los cuales no solo se versa el interés de los particulares, sino que tambien las mas altas cuestiones de derechos públicos. En esta inteligencia nos hemos permitido presentar la siguiente exposicion mirando por los intereses del Estado que nos ha honrado con sus votos para representarlo ante la Legislatura nacional.

R.

Aguilón.

Peri.

La Legislatura del Estado de Sonora expidió en 22 de Junio del presente año un decreto imponiendo, por una sola vez, una contribucion de quince mil pesos repartida entre todo capital ó giro que excediese de dos mil pesos, para cuyo efecto se señaló a cada uno de los Distritos en que está dividido el Estado una cuota proporcional, tocando al de Guaymas la de cuatro mil pesos.

No obstante que con relacion a la importancia de los capitales que giran en Guaymas la cuota indicada era sumamente módica, sin embargo, varios comerciantes de ese puerto animados por el buen éxito que habian obtenido acudiendo a la proteccion de la justicia federal contra otras contribu-



ciencia celebradas en el mismo Estado, y en com-  
vidas lo abando de su nueva pretension, no  
han vaciado en acudir esta vez al recurso de  
amparo con objeto de eximirse del pago de illi-  
mo impuesto.

Antes de las infracciones cometidas  
nada que segun los defensores del amparo se  
han cometido con el (amparo) establecimiento de la  
contribucion de los quince mil pesos; no por lo  
provisional ni equitativa en satisfaccion de lo  
dispuesto en los articulos 31 fraccion 2ª y 3ª de  
la carta fundamental, y en consecuencia atenta  
contra igualmente a las garantias que conguan  
los articulos 13 y 16 del mismo codigo.

Como la seccion 2ª de la comi-  
sion, en la cual esta comprendido el articulo 31-  
se refiere unicamente a los Mexicanos, de los po-  
sibilidades los de origen extranjero han tenido  
que acudir a la seccion 3ª para buscar un  
otro a su fomento. En la carta la simple le-  
tura del articulo 31, que forma la seccion 3ª, ha  
la seccion que absolutamente en nada favorece  
en su pretension a los individuos de nacionali-  
dad extranjera: es articulo dice simplemente en  
la parte conducente. "Tienen obligacion de exten-  
ger) de contribuir para los gastos publicos de la  
manera que dispongan las leyes" sin garantizar  
la equidad o preferencialidad en los impuestos.

Co cuando menos dirigida la fuerza  
dena del recurso de amparo por pretension de la seccion  
2ª del articulo 31 Constitucional: De las tres  
decisiones en que el articulo 101 de la Constitucion  
comprende las leyes o actos de las autoridades que  
quedan desahucias al recurso de amparo que  
establece el articulo 102, la primera decision que  
trata de la pretension de las garantias individuales  
se sera tal vez a la que fundiera, refutacion  
la infraccion del articulo 31, mas este articulo



no contiene una garantía individual, un derecho del hombre, supuesto que excluye al extranjero, como se ha visto, y que los derechos del hombre los garantiza la Constitución mexicana a toda clase de personas sin distinción de nacionalidad.

Pero aun dando por sentado que en efecto proceda el recurso de amparo por violación del art.º 31, ni los quejosos han rendido prueba alguna de que la ley de 22 de junio contrarie en lo mas mínimo el precepto constitucional, ni las razones que aducen en apoyo de su aserto resisten al mas ligero examen.

Es un principio de economía política, es un axioma de justicia, que el impuesto debe ser proporcional; pero aun cuando la ley prescribe la mas exacta proporción al poner en práctica sus preceptos, como la esta dicta aun en los países mas adelantados bajo este respecto, no podría decir con seguridad completa el monto de la riqueza de cada circunscripción territorial, el capital real y efectivo que representa cada ramo de la industria, y mucho menos los bienes que posee cada individuo; es de toda evidencia que tiene que entrar forzosamente como un elemento de la aplicación del principio, la apreciación prudencial, el poco mas o menos. Así es que no debe confundirse la repartición de un impuesto que en abstracto hace la ley, en la cual si debe y puede observarse una proporción exacta, con la calificación necesariamente aproximativa que la misma o la autoridad encargada de su ejecución hicieren, ya del valor de los objetos <sup>sugetos</sup> a contribución, ya de la riqueza relativa de cada uno de los grupos en que pueden haber sido clasificados los contribuyentes, ya de los bienes particulares de cada uno de estos.

Si las anteriores consideraciones



son exactas, resulta como consecuencia ine-  
ludible que el precepto constitucional que or-  
dena guardar la debida proporcion en mate-  
ria de impuestos, se refiere única y esclusi-  
vamente a la relacion que debe existir entre la cuota  
señalada y el capital o el valor del objeto sobre  
que recae el impuesto. Pero en ningun sentido  
puede decirse que el artículo 31 garantice exactitud  
en la estimacion del monto del capital o del valor del  
objeto, cuando esa estimacion por la naturaleza de  
las cosas nunca puede ser sino aproximativa y fun-  
dencial.

A pesar de que estas verdades no se ocultan á  
nadie, los peticionarios tienen la pretension de que  
se considere como una infraccion del art.<sup>o</sup> 31, tantas ve-  
ces citado, la apreciacion inexacta que segun ellos ha  
hecho la Legislatura de Sonora de la riqueza respec-  
tiva de los Distritos de Alamos, Hermosillo y Guay-  
mas, imponiendo á este último una cuota mayor que  
á los dos primeros.

No es menos infundado el reproche de falta  
de proporcion y de equidad que dirigen los quejosos á la  
ley por no gravar con la contribucion que establece  
la los capitales que no llegan á dos mil pesos; alegan-  
do tambien que una excepcion á favor de cierto número  
de personas establece un privilegio contrario al art.<sup>o</sup> 13  
del pacto federal.

Se han desatendido los quejosos de que las  
personas cuyo capital no asciende á dos mil pesos,  
están igualmente sujetas al pago de contribuciones  
por medio del impuesto indirecto sobre los arti-  
culos de primera necesidad: se han desatendido  
de que los impuestos indirectos sobre esa clase de  
artículos son considerados, sin contradiccion, como  
los mas desproporcionados en perjuicio del pobre, y  
que para restablecer la proporcion debida existen  
los impuestos conocidos con el nombre de directos,



los cuales á consecuencia de lo dicho deben recaer sobre el exceso de riqueza que no ha sido gravado por las demas contribuciones; y de aquí la necesidad de tomar como punto de partida para la imposición del impuesto directo un capital mas ó menos considerable: y pasando por alto todas estas consideraciones y otras de no menor importancia es como los promovedores con suma ligereza afirman, que la disposición de la ley que solo exija á los capitales mayores de dos mil pesos no es proporcional, y que establece un privilegio en favor de determinadas personas.

Se alega igualmente por los que solicitan el amparo que el impuesto en cuestion tan poco es equitativo contra el tenor expreso del tantas veces mencionado art.º 31 de la Constitución de la República.

Salta á la vista que si la Justicia federal pretendiera aplicar latamente ese precepto, esto es, declarar cuales eran los impuestos en su concepto los mas convenientes para la Federación y los Estados, y desechar todos aquellos cuyo objeto le pareciere inútil ó que gravaban mas de lo necesario á los contribuyentes, es evidente decimos, que quedaria destruida la soberanía de los Estados y la independencia del poder legislativo de la Union.

El precepto constitucional solo puede ser aplicable en el único y esclusivo caso de importar el impuesto una expropiación: y solamente en ese sentido es como puede estar en armonía con las demas prescripciones de la Carta fundamental, con las instituciones federativas y con la division de poderes, base elemental de nuestra forma de Gobierno.

Y bien,



ninguna prueba han rendido los quejosos de que la cuota que les ha sido señalada sea tan excesiva que absorba todos los productos de su capital ó de su industria.

Tales son las reflexiones que nos ha sugerido el examen imparcial de los motivos que se han alegado para solicitar el amparo de la justicia federal contra la ley expedida por la Legislatura del Estado de Sonora. En cuanto á los fundamentos de la sentencia pronunciada en ese recurso por el C.<sup>o</sup> Juez 2.<sup>o</sup> en plente de Distrito, aunque formulados por un asesor letrado, no son desde el principio hasta el fin (no son) mas que la subversion de todo nuestro derecho Constitucional, y por lo mismo, nos abstenemos de hacer el análisis pormenorizado de ellos para no convertir esta ligera exposicion en una obra voluminosa sobre nuestras instituciones políticas.

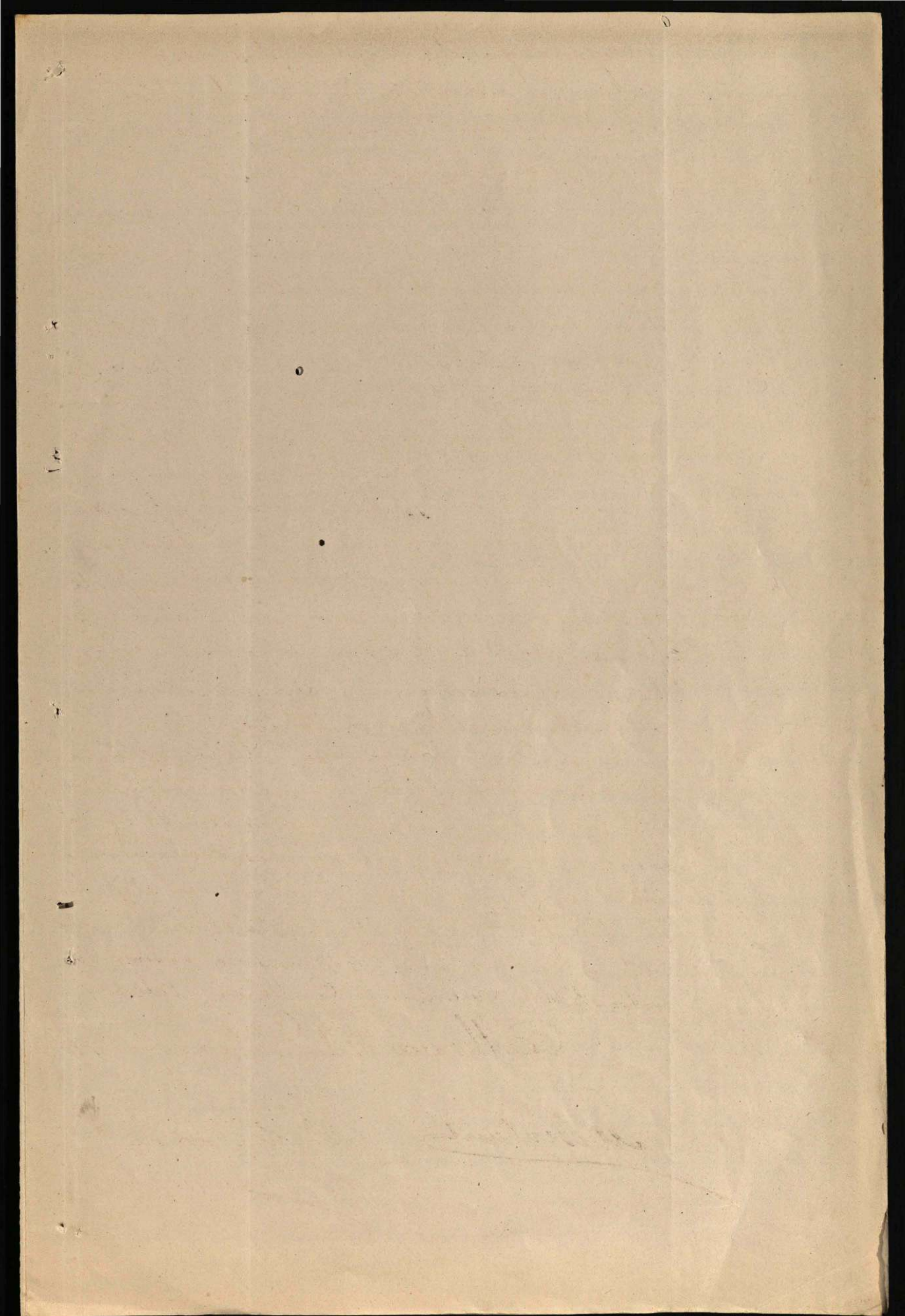
No dudamos que la Corte suprema de justicia obrando con la misma integridad que la movió á dictar medidas severas en un negocio semejante promovido en Durango dará por segunda vez una muestra de su respeto <sup>á la Constitución</sup> denegando el amparo solicitado por varios vecinos de Guaymas. — E. P. = amparo. = no son. = No vale. = E. R. = sujetos. = á la Constitución = Vale.

México 1.<sup>o</sup> de Diciembre de 1874.

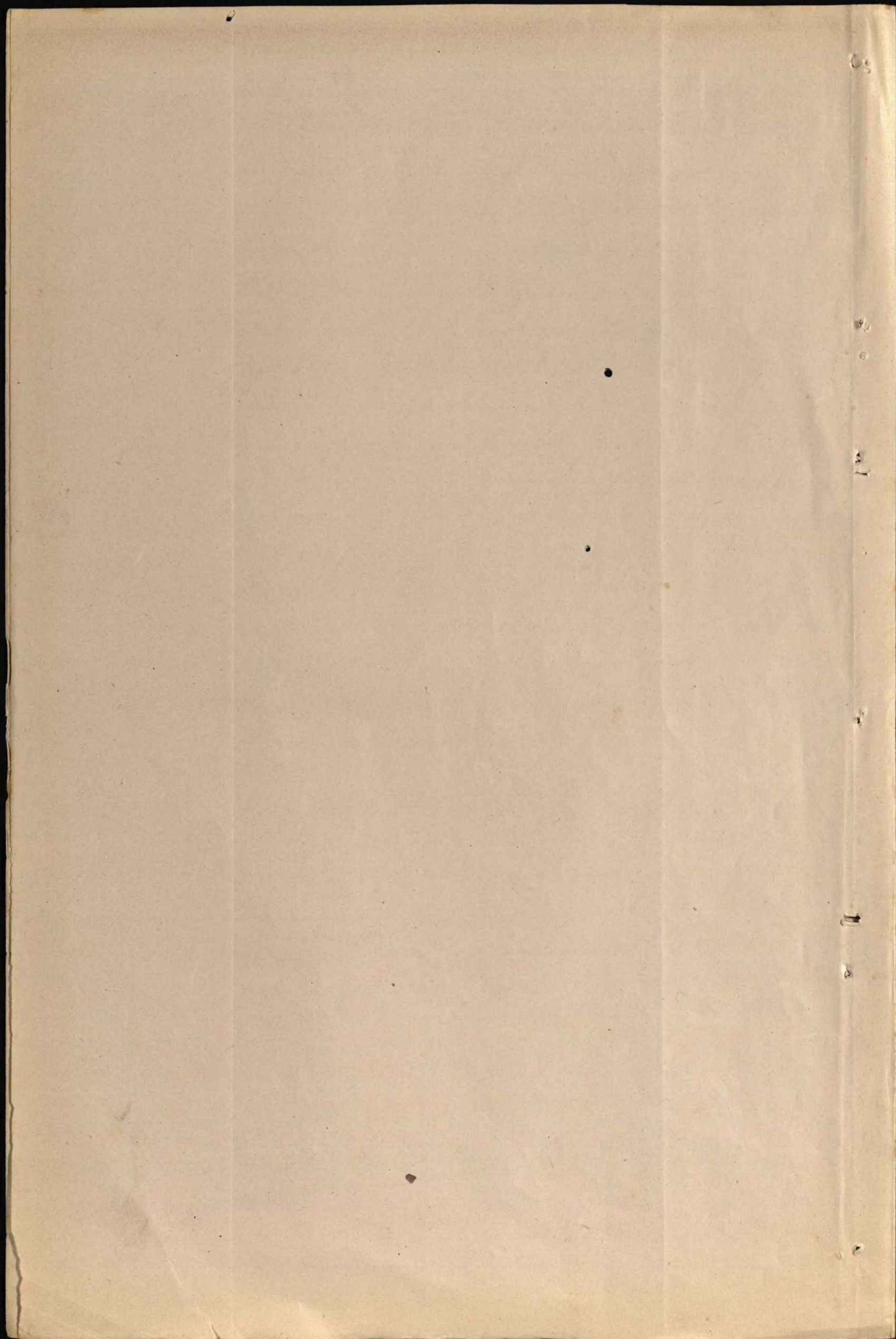
M. Escalante

J. M. Ferreira



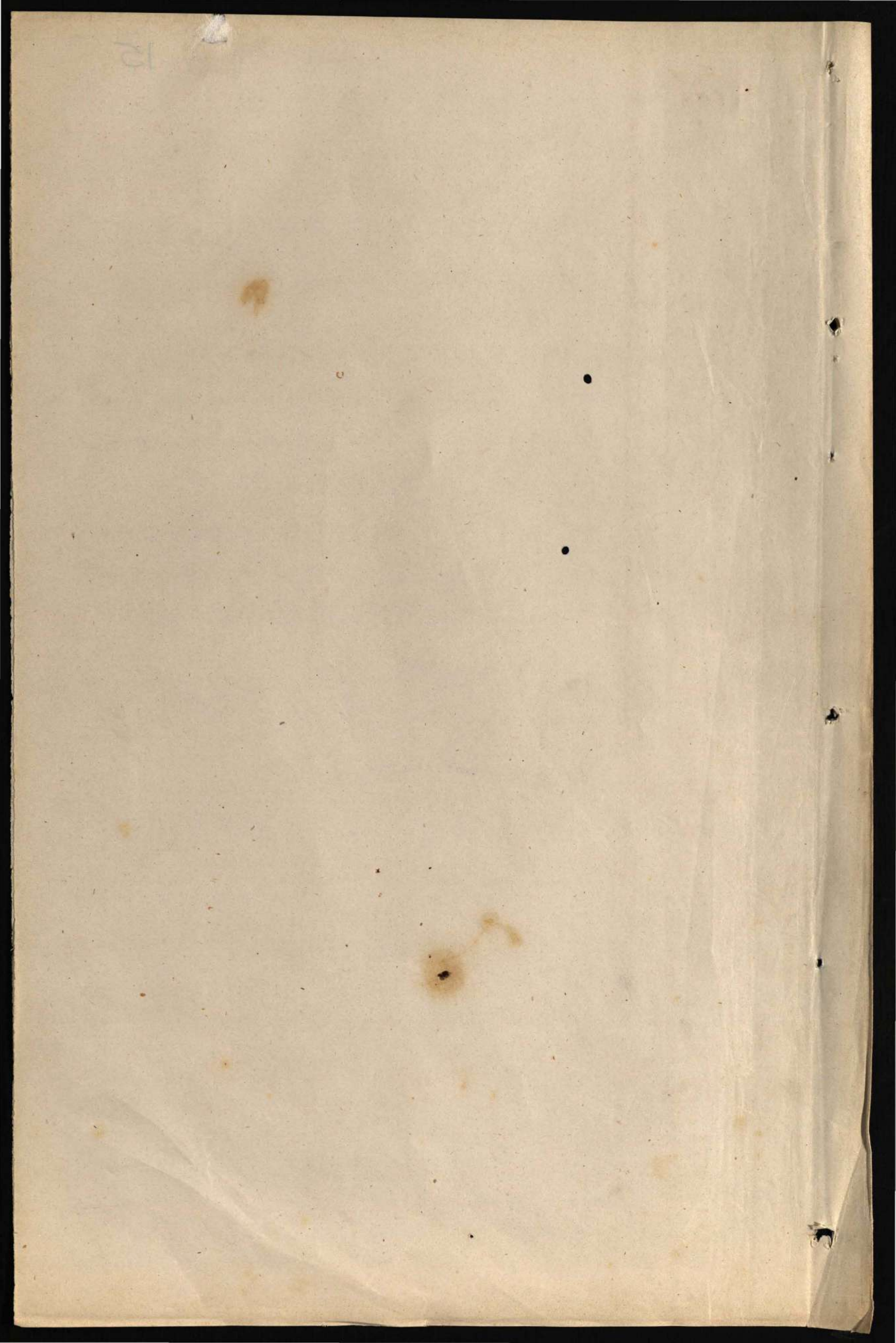




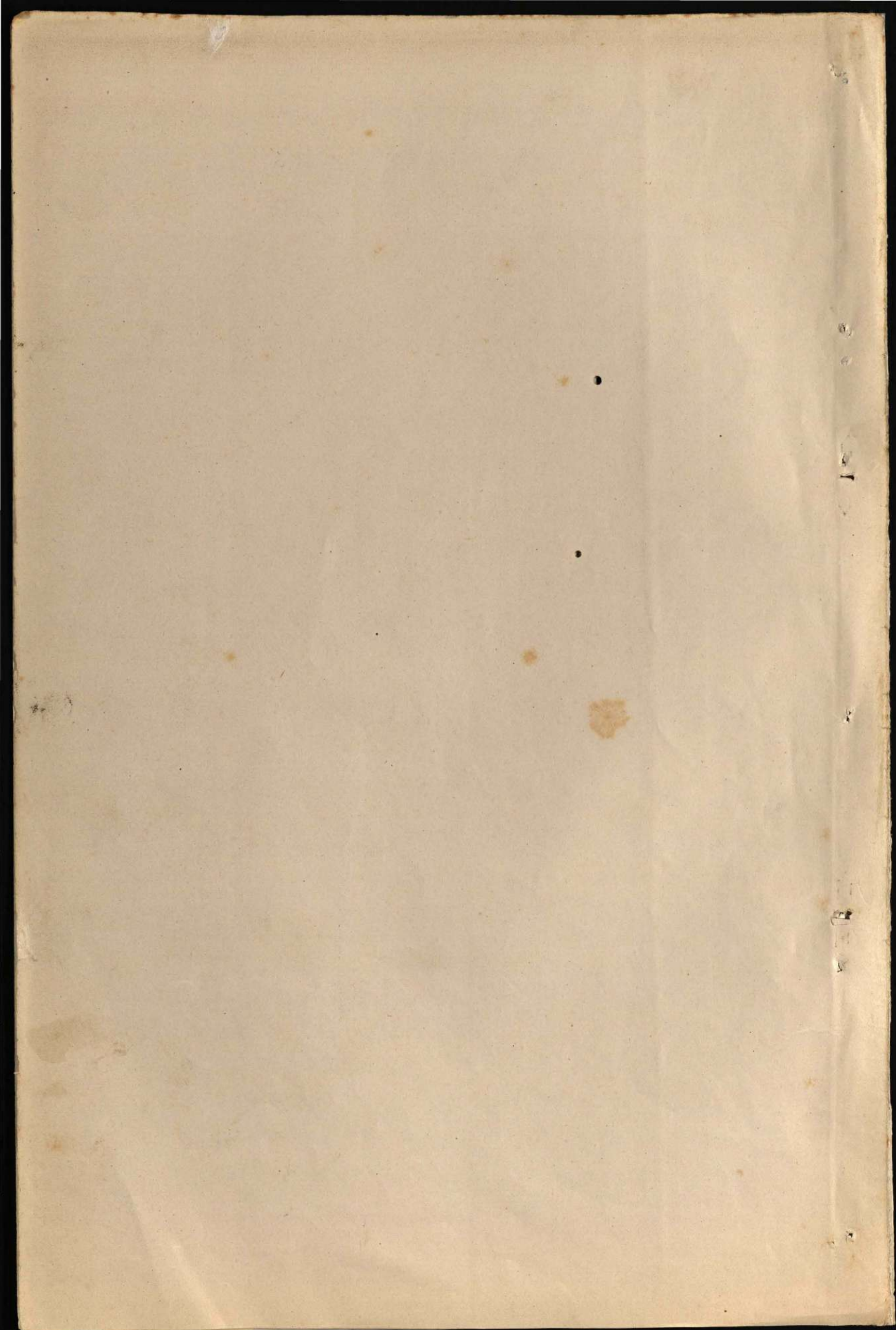




12









México Dic. 9 de 1874.

Visto el recurso de amparo promo-  
vido ante el Juzgado de Distrito  
de Sonora por los J. V. Sandoval, Wen-  
ceslao Yberrí, W. Loaira, Agustín Bar-  
tamente, Francisco Trigozen, Rafael  
Escobosa, Juan Basorabal, José Yber-  
ri, Foranato de la Huerta, José de la  
Cruz, José Esprin, Trineo Michel, Al-  
guel Carrillo, Francisco A. Aguilan,  
Adolfo Brille, Antonio Canale, Vicen-  
te Ortiz, J. M. Lebevier, José Benette-  
ra, Pedro Prieto, Yaac Coppel, J.  
Baeton, Leopoldo Hier, Lorenso Bui-  
de, P. B. Chisserr, Alfonso Guindreau,  
Enrique Larios, Hugo Martens, y las  
Esas. D.ª Dolores R. de Harard, Felipa  
Almada, Clara de Felix y Enri-  
da de Jourcade contra el cobro  
que les hace el Admón. de rentas  
de Guaymas de las cuotas que les  
han sido asignadas para cubrir  
la contribución extraordinaria de-  
cretada por la Legislatura del Esta-  
do en 24 de Junio último, por ser  
contrarias las bases establecidas pa-  
ra la repartición de ese impuesto.



á las prescripciones de los artículos 31. fracc. 3.<sup>a</sup> y 33. de la Constitución federal, y en consecuencia atentatorias á los derechos individuales que garantizan los art. 4.<sup>o</sup>, 13. y 16. del mismo Código; y Considerando que las infracciones á la Constitución se hacen constituir: 1.<sup>o</sup> En que la ley que establece la contribución extraordinaria señalada al Distrito de Guaymas una cuota mayor que á los de Tlaxcala y Veracruz no obstante que por las leyes anteriores relativas á la materia se ha considerado al primero de estos Distritos como inferior en riqueza á los otros dos ó cuando mas, igual á uno de ellos; sin que justifique esa variación el cambio de las circunstancias respectivas de los tres Distritos, pues ninguno ha habido; y que por lo mismo la cuota señalada á Guaymas no es ni proporcional ni equitativa, contra lo dispuesto en el art. 31. constitucional. 2.<sup>o</sup> Que la misma ley exesptúa del pago de la Contribución á los capitales, gijos é industrias que representen un valor de dos mil pesos ó menor, siendo así que las contribuciones ordinarias gravan á los



capitales desde seiscientos pesos  
en adelante, por lo que la dis-  
tribucion no solo es contraria a la  
absoluta a la igualdad de derechos  
y obligaciones que establecen los  
art. 13. y 31 del Pacto federal, sino  
que tambien lo es por la diferen-  
cia que establece entre los impues-  
tos ordinarios y la contribucion  
extraordinaria. 3.º Que alega igual-  
mente que el nuevo gravamen  
no es equitativo en razon de  
que conforme a la Constitucion par-  
ticular del Estado no pueden esta-  
blecerse mas contribuciones que  
las necesarias para cubrir los gas-  
tos del mismo Estado y la parte  
que le corresponde de los de la Fed-  
eracion, y que la suma que repre-  
senta en su total el nuevo impus-  
to excede y con exceso a la que e-  
xigen esos gastos.

Considerando en cuanto al pri-  
mer punto, que la mayor ó me-  
nor inasatisfaccion con que la legis-  
lativa del Estado de Sonora ha  
biera estimado la vigencia respec-  
tiva de los tres Distritos menciona-  
dos no puede motivar por si so-



la la concesion del impuesto de la  
Justicia federal, en virtud de que  
esa apreciacion por la misma natura  
valera de las cosas tiene que ser conje-  
tural y solo aproximada; que por o-  
tra parte la simple circunstancia  
de haberse considerado en ocasiones  
anteriores al Distrito de Guaymas  
en una categoria inferior á la de Sta-  
mos y Hermosillo con relacion á su  
vigueria respectiva nada prueba en  
contra de la nueva graduacion, su-  
puesto que no se ha justificado que  
la antigua fuera la acertada, ni tam-  
poco aunque se alega, que las circuns-  
tancias sean las mismas.

Considerando con respecto al segun-  
do punto que el hecho de haberse ai-  
nido del impuesto á los capitales, gajos,  
industrias etc. que representen un va-  
lor de dos mil pesos ó menor, no de-  
muestra por si solo que las personas  
sobre las cuales recae el nuevo gravá-  
men hayan quedado sujetas en lo de  
adelante á contribuir para los gastos  
públicos con una suma mayor de la  
que debieran correspondientes observan-  
do una exacta proporcion entre todos  
los habitantes del Estado; pues el sistema



de contribuciones que existen so-  
nora puede ser de tal especie que  
haya sido necesario precisamente  
para guardar la proporción de-  
bida, exceptuar de la contribución  
à los individuos que se consideraban  
estar ya demasiado gravados  
con el resto de las contribuciones: Que  
por otra parte no puede considerarse  
como un privilegio contrario à  
la igualdad de derechos y obligacio-  
nes que garantiza el art. 13. de la Car-  
ta fundamental las excepciones que  
siempre contiene la ley en fa-  
vor de los impedidos y de las personas  
cuya pobreza no les permitiera cum-  
plir con las prescripciones de la ley:  
asi como que es una condición in-  
dispensable para que la recauda-  
ción de los impuestos que recaen so-  
bre el capital ó sus productos sea  
llevada y expedida tomar como pun-  
to de partida desde el cual deban  
enumerar à causar se, los capitales  
que por su importancia no pueden  
ser vendidos fácilmente.

Considerando que igualmente  
no puede ser materia de este reque-  
so la cuestión de incremento de la



contribuciones extraordinarias es su-  
perior á la suma que representa  
la parte de egresos del Estado, para  
cubrir la cual fue establecida; y si  
la Legislatura de Sonora ha infringi-  
do por este motivo la Constitucion  
en particular del Estado, pues las  
infracciones de esa especie solamente  
pueden dar lugar á los recursos  
establecidos por la legislacion lo-  
cal; siempre que, como sucede en  
el caso presente, no hubiere sido  
vulnerada al mismo tiempo la  
Carta fundamental de la Repu-  
blica.

Por estas consideraciones, y con  
apoyo de los art. 101. y 102. de la  
Constitucion federal y 16 de la de  
Enero de 1869 se decreta:

- 1.º Se revoca la sentencia pronun-  
ciada por el Juez 2.º Suplente de  
Distrito de Guaymas en 17 de Set.  
de este año que declaraba haber lugar  
al amparo de la Justicia federal  
en el presente caso.
- 2.º La Justicia de la Union no com-  
para ni protege á los quejosos con-  
tra el acto del C. Admin. de rentas  
de Guaymas por el cual les exige



el pago de la cuota que les ha sido  
asignada por contribución extraor-  
dinaria en virtud de la ley del Exe-  
cuto de 24 de Junio último.

3.º Se impone á los solicitantes una multa  
de cien pesos.

Devuélvase los autos al Juzga-  
do de su origen con copia certifi-  
cada de esta sentencia, publíquese,  
y archívese á su vez el 7.º.

*[Faint signature]*

*[Large signature]*

*[Signature]*



por unanimidad de votos en favor  
to al primero y segundo punto y por  
mayoridad en cuanto al tercero lo de-  
cretaron los C.C. Presidente y Ministros  
que formaron el Tribunal Pleno de  
la Corte Suprema de Justicia de los  
Estados Unidos Mexicanos y fir-  
maron.

J. J.

José M. Iglesias

M. Luna

C.C. Presidente

Juan F. delafarria

José Arceaga

Iglesias

Ministros

Arceaga

García

Arceaga

Ramírez

Cortázar

Alamirano

Velazquez

Zavala

García

Don. Aguirre

Ignacio M. Alvarado

José P. Ramírez

José García Ramírez

L. Alvarado

M. Zavala

Certifico: que el C. Ministro Manuel



de Cantabria y Nájera intervinieron  
en la votación de este amparo, y que  
por haber fallecido antes de firmarse  
la sentencia anterior, no aparece  
en ella su firma. México Febrero  
9 de 1875

Luis M.<sup>a</sup> Aguilar.  
Fmo.



DEPT. OF AGRICULTURE  
BUREAU OF PLANT INDUSTRY  
WASHINGTON, D. C.



Devuelvo á V. en fs. 23 el expediente de amparo pro-  
movido por ~~varios Comerciantes de~~ <sup>puerto</sup> ~~de~~ contra el ~~C. Aduana~~  
~~de Veracruz~~ y en fs. 4 copia certificada de la sentencia  
pronunciada por esta Corte Suprema; esperando se sirva avi-  
sarme de su recibo, así como cuidar de que los interesados repon-  
gan las estampillas respectivas, tanto en la copia que se le remi-  
te, como las del Toca de este Tribunal que son 4 folios

Independencia y Libertad. México, Feb 11  
de 1875

C. Juez de Distrito de Sonora }

Guaymas



12







